



MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 089

Procedimiento: Verbal (pertenencia).

Demandante: Lena Business Corp.

Demandados: Sociedad Valencia y Henao y CÍA Colectiva Civil en Liquidación.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 003 2020 00171 01.

Procedencia: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Decisión: Confirma.

Temas: La extinción del dominio en favor del Estado sobre las cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital de una sociedad, no coloca automáticamente en cabeza de aquél los bienes de que la sociedad sea propietaria. Cuando el bien pertenece a varias personas en común y proindiviso, cada una de ellas es propietaria de todo el bien, en el porcentaje que tenga, y si uno de esos condóminos es una entidad de derecho público, el bien no es susceptible de usucapión.

Medellín, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación interpuesto, en subsidio al de reposición, por la parte demandante contra el auto proferido el 9 de mayo de 2023, por medio del cual se declaró terminado anticipadamente el presente proceso de pertenencia con fundamento en el inciso 2º numeral 4º del artículo 375 del CGP.

ANTECEDENTES.

La sociedad Lena Business Corp pretende la prescripción adquisitiva de dominio del 50% del inmueble con M.I. 001-91084. Por tal motivo, demandó a la sociedad **VALENCIA Y HENAO Y CÍA. COLECTIVA CIVIL "EN LIQUIDACIÓN"**, quien figura inscrita como propietaria de dicho porcentaje pro-indiviso.

El Dr Luis Alberto Zapata, actuando en calidad de Depositario Provisional con funciones de liquidador de la sociedad demandada, designado por Resolución número 4287 del 20 de septiembre de 2018, de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, contestó la demanda oponiéndose a la pretensión y solicitando se decretase la terminación anticipada del proceso, por cuanto la pretensión de pertenencia recae sobre un bien imprescriptible de acuerdo con lo establecido por el artículo 375-4 del C.G.P. Ello por cuanto mediante sentencia de 10 de febrero de 2003 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 10 de agosto de 2006, en el Libro 9º, bajo el número 8201, se decretó la extinción del derecho de dominio en favor de la Nación *"sobre las cuotas sociales de la Sociedad VALENCIA Y HENAO Y CIA. COLECTIVA CIVIL "EN LIQUIDACIÓN", quedando a cargo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), en virtud de la providencia judicial en firme, la administración de todos los bienes"*.

Por auto del 9 de mayo de 2023, el Juzgado decretó la terminación anticipada de este proceso de pertenencia con fundamento en el inciso 2º numeral 4º del artículo 375 del CGP. Argumentó: *«que no se pueda adquirir por prescripción ningún bien en el que una entidad de derecho público sea la titular del derecho de dominio, sea directa o indirectamente, como en este caso, en donde el derecho que se pretende adquirir está en cabeza de una sociedad (Valencia y Henao y Cía. Colectiva Civil en Liquidación), en la que a su vez el interés social lo tiene en su totalidad un fondo público (Frisco), que a su vez es administrado por una entidad pública (SAE S.A.S.)»*.

LA IMPUGNACIÓN.

Oportunamente la demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que *«tanto el FRISCO como la SAE SAS, está sometidos a normas de derecho privado ... [y que] el objeto del FRISCO y de la SAE no es apropiarse de los bienes que administran, sino reingresarlos al torrente comercial, por medio de operaciones de derecho privado, por lo tanto, estos bienes no se (sic) uso público ni son públicos con uso exclusivo o con licencia para particulares, por el contrario, el uso de estos bienes desde su incautación hasta su enajenación es realizado por parte de particulares. De*

otro lado, el FMI 001-91084 no registra ninguna limitación al dominio que impida su libre comercialización».

El juzgado, al resolver el recurso horizontal, se mantuvo en su decisión por auto del 6 de junio de 2023. Explicó: *«si bien su régimen jurídico [se refiere al aplicable a la SAE SAS] se sujeta a las reglas del Derecho Privado, esto no hace que deje de considerarse como una entidad pública. Corolario de lo anterior, se itera lo dicho en la providencia atacada, y no se repone la decisión adoptada, dado que todos los intereses o cuotas de sociales de la Sociedad Valencia y Henao Cía. Colectiva Civil en Liquidación, fueron objeto de extinción de dominio y, en consecuencia, traspasados al Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), en virtud de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2003 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín. En este sentido, no puede perderse de vista que el bien objeto de usucapión hace parte del conjunto de los bienes administrados por el FRISCO y según lo manifestado por la SAE S.A.S., por disposición de una autoridad judicial fue vinculado a un trámite con fines de extinción de dominio, que en la actualidad es del conocimiento de la Fiscalía 20 DEED».* Por ende, concedió la apelación interpuesta en subsidio, y para resolver la misma se,

CONSIDERA

El auto atacado es susceptible del recurso de apelación conforme lo establece la última parte del inciso 2º del numeral 4º del artículo 375 del CGP.

El recurrente sostiene que en este caso no es procedente la terminación anticipada del proceso pertenencia, porque el bien inmueble de M.I. 001-91084 no es de propiedad de una entidad de derecho público y tampoco registra ningún tipo de limitación para su tráfico comercial; que la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), es una sociedad de economía mixta del orden nacional y está sometida al derecho privado (art. 90 Ley 1408 de 2014); y el FRISCO es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrado por la SAE, y que estos no tienen por objeto *«apropiarse de los bienes que administran, sino reingresarlos al torrente comercial, por medio de operaciones de derecho privado».*

Expresa también que en el escenario de la extinción de dominio se distinguen dos fases: la primera es de medidas cautelares, proceso de extinción del derecho, y enajenación de los bienes; y la segunda, la destinación de los recursos provenientes de esa enajenación, sumas estas que no administra el FRISCO ni la SAE sino que se entregan a entidades públicas para que lo administren, siendo esto lo que se convierte en un bien público.

Para negar la reposición comenzó el señor juez por expresar que la SAE es una sociedad de economía mixta del orden nacional, que éstas, conforme al art. 97 de la Ley 489/98 forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el sector descentralizado por servicios, en el caso de la SAE, vinculada al Ministerio de hacienda, por lo que si bien su régimen se sujeta a las reglas del derecho privado, no deja de considerarse una entidad pública. De donde concluye *“Corolario de lo anterior, se itera lo dicho en la providencia atacada, y no se repone la decisión adoptada, dado que todos los intereses o cuotas de sociales de la Sociedad Valencia y Henao Cía. Colectiva Civil en Liquidación, fueron objeto de extinción de dominio y, en consecuencia, traspasados al Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), en virtud de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2003 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín”*

Para resolver se

CONSIDERA

Sin entrar en innecesarias disquisiciones sobre la naturaleza jurídica, pública o privada, de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), como del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), refulge con nitidez que tanto el argumento del señor juez a-quo, como los aducidos por el recurrente, son a todas luces desacertados, pues no hay que perder de vista que la “alícuota del 50%” del inmueble distinguido con la M.I. 001-91084 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, que es exactamente sobre lo que versa la pretensión formulada, se encuentra en cabeza de la sociedad de derecho privado VALENCIA Y HENAO Y CIA COLECTIVA CIVIL "EN LIQUIDACION", titularidad que no ha sido extinguida, pues lo que fue materia de extinción de dominio

en la sentencia fechada el 10 de febrero de 2003 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín y que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio local desde el 10 de agosto de 2006, fueron las PARTES DE INTERES representativas del capital social de la compañía aquí demandada. En otras palabras, en este punto, los bienes que son ahora propiedad del Estado, son esas partes de interés en el capital social de dicha compañía, que es la propietaria del derecho inmueble reseñado, y que de acuerdo con la normatividad legal vigente, constituye una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 98 C.Co), lo que no pierde vigencia porque todas las cuotas o partes de interés lleguen a radicarse en una sola persona. Porque son así las cosas, a la restitución y reembolso de aportes solo hay lugar luego de haberse cancelado el pasivo externo (arts. 143 y 144 C.Co.).

De modo que no puede argüirse, como lo hace el sr juez a-quo en el auto cuestionado, que se trata de un dominio (sobre el inmueble) "indirecto" en cabeza del Estado, ya que este derecho real, por definición y naturaleza, solo puede ser directo (art. 669 Código Civil), el socio no es propietario "indirecto" de los bienes en cabeza de la sociedad.

Pero tampoco asiste razón al recurrente al afirmar que el inmueble con M.I. 001-91084, no es de una entidad de derecho público, y no le acompaña la razón por cuanto la prueba obrante en la foliatura da cuenta de que el Estado colombiano es el propietario de dicho bien raíz en porcentaje del 50%, en común y proindiviso con la sociedad aquí demandada, titularidad que adquirió conforme a sentencia de extinción de dominio fechada el 16 de febrero de 2018, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, inscrita en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria el día 3 de marzo de 2021, bajo la anotación número 035.

Significa lo anterior que el Estado Colombiano es actualmente el propietario del 50% de cada milímetro cuadrado del inmueble en cuestión, pues cuando el dominio de un bien (mueble o inmueble) radica en varias personas, con iguales o diferentes cuotas, cada una de ellas detenta el porcentaje respectivo sobre la totalidad del mismo, y así será mientras dure la comunidad, es decir, hasta que esta se liquide ya sea por partición material o por venta. Sobre el

particular y con importante apoyo doctrinal, esto dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-791 de 2006:

"Al respecto del cuasicontrato de comunidad, puede decirse que "un mismo derecho pertenece a dos o más sujetos conjuntamente. En la verdadera comunidad, communione pro indiviso, el derecho de cada comunero se extiende a toda y cada una de las partes de la cosa común...Hay comunidad o indivisión cuando varias personas tienen sobre la totalidad de una misma cosa y sobre cada una de sus partes derechos de idéntica naturaleza jurídica, o mejor, un solo derecho..."¹."

Así las cosas, mientras la comunidad subsista, como ocurre en el presente caso, siendo el Estado propietario de una alícuota del 50%, el inmueble no puede ser objeto de usucapión, ni en todo, ni en parte, ni en una determinada "cuota" porque, se reitera, el dominio del Estado abarca todo el bien, aunque en el porcentaje reseñado, muy a pesar de que la sociedad VALENCIA Y HENAO Y CIA COLECTIVA CIVIL "EN LIQUIDACION", también sea dueña del predio, en igual proporción.

Así las cosas, aunque no por la razón aducida por el juez debe mantenerse el auto atacado.

De lo visto y sin necesidad de ahondar en más consideraciones la suscrita magistrada

RESUELVE,

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 9 de mayo de 2023.

SEGUNDO. Devuélvanse las piezas digitales al despacho de origen. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

¹ Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, "Los bienes y los derechos reales". Tercera Edición. Editorial Nascimento. Santiago de Chile, 1974.

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c0b2c78a30323820809deb95126401c6abe41ddab19bc5dd7f154611a36e79a7**

Documento generado en 31/08/2023 08:07:02 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>